

Notas críticas

**Una visión crítica de las encuestas
centroamericanas de la United
States Information Agency**

*Kenneth M. Coleman
Lee Singelman*

EN LA PRIMAVERA de 1986 versiones periodísticas hicieron públicos los resultados de una serie de encuestas patrocinadas por la United States Information Agency (USIA) en cuatro países centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador), los que suscitaron atención y provocaron reacciones encontradas: los partidarios de la política de Reagan hacia América Central demostraron su beneplácito, mientras que los opositores no pudieron ocultar su sorpresa y escepticismo. De acuerdo con los informes de prensa, las encuestas revelaron que la mayor parte de los ciudadanos de esos cuatro países eran partidarios de los supuestos que justifican la política actual de Estados Unidos hacia América Central. Por ejemplo, *La Nación*, el principal periódico de Costa Rica, citó el dato según el cual un 73% de los encuestados consideraban que Nicaragua constituía una amenaza militar, mientras que sólo un 5% pensaba que Estados Unidos lo era. Otros resultados, expuestos con gran despliegue periodístico en Estados Unidos y en otras partes en el mismo momento, aludían al mismo tema, apuntando en forma consistente hacia una interpretación de los acontecimientos centroamericanos que tenían gran coincidencia con la política del gobierno de Reagan (véase, recientemente, Purcell, 1987).

¿Son estos resultados científicamente verosímiles? En un intento por investigarlo solicitamos información y documentación de la USIA. La Agencia contestó enviándonos una serie de materiales, que incluían: una copia del *Congressional Record* (actas del Congreso norteamericano) en la que el diputado Living-

ston (republicano del estado de Louisiana) informaba sobre algunos resultados de la encuesta y concluía que “los centroamericanos comprenden el peligro que Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética plantean para su futuro. Entienden también que Estados Unidos está tratando de ayudarles a hacer frente a su problema”, una columna periodística firmada por Jeanne Kirpatrick, que hacía mención a resultados selectos de las encuestas en el contexto de un argumento en favor de la solicitud del gobierno para obtener fondos para la *contra*, y una colección de crónicas de *La Nación*, *La Estrella de Panamá* y el *Washington Times*. Estos materiales fortalecieron nuestra percepción de los usos políticos a los que se pueden prestar las encuestas, pero no proporcionaban una base sobre la cual evaluarlas. Por ello iniciamos el trámite de una solicitud, formulada con base en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), para que nos proporcionaran los informes técnicos y la base de los datos. No los enviaron pero, más tarde, recibimos un código que contenía el cuestionario y las distribuciones de frecuencias por países para cada pregunta. Los comentarios que siguen están basados en estos materiales incompletos, a los que hemos agregado otra información que obtuvimos durante el desarrollo de nuestra investigación.

El primer aspecto de las encuestas que merece atención es la estrategia de muestreo que siguió la *Consultoría Interdisciplinaria de Desarrollo* (CID), organización afiliada a la Gallup International que llevó a cabo el trabajo. De acuerdo con la prensa, en cada país se encuestaron dos segmentos de la población: la de la capital y sus alrededores y la de otras ciudades con más de 10 000 habitantes. La exclusión deliberada de las áreas rurales nos hizo desconfiar de la posibilidad de estimar parámetros en escala nacional, a pesar de que, en justicia, deberíamos decir que en otras encuestas realizadas en América Latina —como la que Almond y Verba hicieron en México para su célebre libro sobre la cultura cívica (*Civic Culture*, 1963)—, se usó una estrategia similar. Parece razonable suponer que cualquier sesgo político derivado de un sobremuestreo de las áreas urbanas irá en el sentido de exagerar las críticas de la política norteamericana, una conclusión que es consistente con la afirmación usual de que las tendencias críticas y opositoras son más frecuentes en contextos urbanos. Lo que es más sorprendente en estas encuestas

es, desde luego, el predominio del apoyo a la política norteamericana y ese hecho en sí permite descartar la muestra urbana como una fuente importante de falta de validez.

Otras cuestiones geográficas relacionadas con el muestreo quedan poco claras debido a la escasa documentación existente. Sólo para uno de los países existía una descripción de la distribución de las entrevistas entre la ciudad principal y las demás áreas urbanas (300 en Tegucigalpa y 600 en otros lugares). Los materiales que recibimos incluían una lista de ciudades, por país, en las que se habían realizado entrevistas, pero al mismo tiempo afirmaban que “algunas localidades en la parte sur de Honduras habían sido excluidas” y que “a causa de la situación política en El Salvador, algunas ciudades del este de dicho país, como La Unión y Morazán, originalmente en la muestra”, habían sido remplazadas. Esas desviaciones podían dar lugar a distorsiones serias, especialmente en El Salvador, pero a falta de más información es imposible estimar la magnitud de las mismas.

También es objeto de preocupación la ausencia de una descripción de los procedimientos de muestreo dentro de las comunidades elegidas. Sabemos (a pesar de que esto pasó inadvertido en los informes de prensa que examinamos) que sólo fueron entrevistadas personas con cuando menos siete años de educación formal. Sobre la base de nuestros cálculos estimados, por esta restricción se descalifica aproximadamente a dos tercios del público de El Salvador, Guatemala y Honduras y a un poco menos del de Costa Rica.

Si las encuestas tenían verdaderamente el propósito de entregar una lectura adecuada de la opinión pública en esos países, entonces es difícil comprender por qué sólo se entrevistó a quienes tenían más de siete años de escolaridad. Por otra parte las configuraciones actitudinales resultantes pueden ser menos distorsionadas de lo que uno inicialmente podía suponer. El análisis que Coleman ha realizado de información de encuestas sobre obreros industriales en México y Venezuela (basado en el trabajo de campo realizado por Técnica, S.A., en México y Multianálisis, C.A., en Venezuela) y de acuerdo con experiencias similares en otras bases de datos latinoamericanas, podemos mostrarnos escépticos con respecto a la capacidad predictiva del logro educativo como indicador de las actitudes sociopolíticas. En todo caso, los estudiosos de la opinión pública deberían sen-

tirse poco a gusto con la decisión de muestrear sólo a la fracción más educada de estas cuatro poblaciones. De acuerdo con Charles Denton, el presidente del CID, el objeto de esta exclusión era reducir el número de entrevistados que, para no parecer estúpidos, inventarían una respuesta sobre la marcha. Estos efectos constituyen una preocupación legítima en la realización de encuestas, pero existen mucho mejores métodos para mantenerlos dentro de rangos aceptables que la decisión de simplemente excluirlos que tomó el CID (véase Converser y Presser, 1986).

Si pasamos a considerar lo relativo a la construcción del cuestionario, debemos mencionar que, a pesar de nuestro escepticismo inicial, no encontramos fuentes obvias de sesgo en las encuestas centroamericanas. No obstante, en algunas ocasiones nos encontramos con la posibilidad de que el ordenamiento de algunas preguntas y la formulación de otras podía haber influido, o hasta determinado, las opiniones expresadas. Por ejemplo, al principio de la encuesta, los entrevistados debían elegir, en una lista, cuáles eran los principales problemas internacionales a que se enfrentaba su país. Una opción en la lista era "problema con Nicaragua", pero "problemas con Estados Unidos (o cualquier opción que implicara a este país) no se encontraba en ninguna parte. La pregunta siguiente era abierta: los entrevistados debían nombrar un país que representara una amenaza para el suyo. Un 87%, en Costa Rica, 79% en Honduras, 56% en El Salvador y 30% en Guatemala eligió a Nicaragua, un tipo de respuesta que podía significar mucho o podía estar predeterminado porque Nicaragua estaba en primer lugar.

Otra serie de preguntas era simplemente irracional. La primera pregunta en dicha serie usaba un formato abierto y preguntaba: ¿"existe algún país que intervenga demasiado en nuestros asuntos internos?" En los cuatro países, Estados Unidos dominaba las respuestas, un hallazgo que no había sido mencionado en ninguna de las crónicas, ni en las copias del *Congressional Record*, ni en ningún otro material que la USIA nos hizo llegar. Extrañamente, a esta pregunta seguía otra, cerrada, sobre si esa intervención tenía "un carácter positivo o negativo". De los que identificaban a los Estados Unidos como el país que intervenía demasiado en los asuntos internos de su país, la gran mayoría dijo que para "su bien". ¿Qué quiere decir intervenir "demasiado" pero "para su bien"? Quizá el CID tenga alguna

intuición especial sobre las sutilezas sociolingüísticas del área centroamericana, pero, en lo que a nosotros respecta, simplemente no tenemos idea de lo que esta serie de respuestas puede querer decir ni tampoco podemos imaginar la racionalidad científica para hacer las preguntas de esta manera.

Algo que también puede ser objetado es una serie de preguntas que persigue evaluar una lista de diez países, incluyendo a los centroamericanos, los integrantes del Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), Cuba, los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero excluyendo el país del entrevistado. Si bien esta exclusión podía haber sido deliberada para neutralizar el miedo que el entrevistado podía tener de que su respuesta fuera utilizada en contra suya, la ausencia de una explicación al respecto hace difícil interpretar las respuestas. Por ejemplo, 68% de los salvadoreños entrevistados criticaron a Nicaragua, pero ¿eran igualmente críticos de su propio país? Uno no puede evitar preguntarse cómo los ciudadanos de Guatemala y El Salvador, en donde escuadrones de la muerte y guerras civiles han operado ya durante la mayor parte de los años ochenta, puedan sentir a propósito de su país, y si estos sentimientos son más positivos que su evaluación de Nicaragua.

En síntesis, ¿qué podemos concluir de estas encuestas? A pesar de que somos escépticos con respecto a las motivaciones de la USIA y de que consideramos que algunos aspectos de ellas son problemáticos, no podemos desconocer estos datos. Desde hace tiempo los estudiosos de la opinión pública en América Latina saben que los pobres tienen una visión anticomunista latente y en este sentido los principales hallazgos de estas encuestas son convergentes con la evidencia existente. Sin embargo, por mucho que a varios críticos de la política norteamericana les gustaría desacreditar estas encuestas, el impacto central de los hallazgos que contienen no es totalmente inconcebible. Por otro lado, algunos aspectos de las encuestas son tan problemáticos que difícilmente se puede tener gran confianza en la validez de los resultados divulgados.

Por supuesto existen dificultades en el trabajo de campo en Centroamérica. La naturaleza de las mismas se mencionan en un informe reciente de Ignacio Martín Baró y Víctor Antonio Orellana (1984) sobre una encuesta que realizaron en seis provincias de El Salvador:

Las dos etapas de la encuesta fueron realizadas en forma oral y estaban dirigidas a segmentos populares y de clase media de la población, principalmente a aquellos que vivían en áreas urbanas y semiurbanas de once municipios elegidos por su representatividad de la población nacional. Estas muestras estaban estratificadas por tipo de vivienda (tugurios, mesones, colonias ilegales, etc.) y por tipo de circulación (migrantes). El margen de error para la determinación de las muestras puede estimarse en un 5%, pero la ausencia de registros censales recientes demuestra que partimos de estimaciones demográficas dudosas, dadas las dificultades para ponderar los movimientos migratorios generados por la guerra.

Nos preguntamos cómo se las ha arreglado el CID para evitar estos obstáculos y no podemos sino preguntarnos acerca del contraste entre la sobria evaluación de los problemas muestrales en El Salvador presentada por dos profesores locales y la ausencia de discusión sobre las dificultades metodológicas en los informes periodísticos presentados acerca del esfuerzo investigativo del CID.

Estas consideraciones nos llevan, en conclusión, a reflexionar sobre algunos asuntos generales de la ciencia social, del desarrollo nacional y de la autonomía regional.

Ha llegado el momento de que los latinoamericanos desarrollen un marco institucional que asegure la calidad y analice, archive y distribuya el análisis secundario de información recogida en el área. El esfuerzo más significativo que conocemos es el Banco de Datos de Opinión Pública de la Universidad Simón Bolívar, de Caracas, Venezuela, pero su acervo está limitado a encuestas realizadas en ese país y su financiamiento es claramente insuficiente. Estas tareas no pueden ser abandonadas a los forasteros, independientemente de sus motivaciones. El mejoramiento de la infraestructura, en general, y de la calidad de las encuestas, en particular, podría incluirse como parte del esfuerzo de desarrollo de los países latinoamericanos. En un estudio clásico de la política latinoamericana, Charles Anderson (1967: 115-138, 139-156) atribuyó la persistencia de muchos problemas a la ausencia de una información efectiva sobre lo que la gente piensa, lo que hace más verosímiles las formulaciones extremistas de las demandas populares. Sería ingenuo pensar que la democracia podrá cabalgar fácilmente en América Latina sobre la espalda de las encuestas de opinión pública pero, para aquellos

latinoamericanos que quieren definir su propio futuro, nuestra revisión de las encuestas de la USIA sugiere que tareas tan pro-saicas como la evaluación de la opinión pública pueden ser centrales para mejorar el proceso de gobierno. Es mejor no abandonar a la United States Information Agency una tarea de esta envergadura.

Traducción de Francisco Zapata

Referencias

- Almond, Gabriel, y Sidney, Verba, *The Civic Culture*, Princeton University Press, 1963.
- Anderson, Charles, *Politics and Economic Change in Latin America, the Governing of Restless Nations*, Van Nostrand, Nueva York, 1967.
- Baro, Ignacio Martín y Víctor Antonio Orellana, "La necesidad de votar: actitudes del pueblo salvadoreño ante el proceso electoral de 1984", *Estudios Centroamericanos*, abril-mayo de 1984, pp. 253-264.
- Converse, Jean, y Stanley Presser, *Survey questions: handcrafting the Standardized Questionnaire*, Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, series núm. 07-063, Sage Publications, Beverly Hills, 1986.
- Purcell, Susan Kaufman, "A Flaw in the Latin Plan", *New York Times*, 12 de agosto de 1987.

